

Eventos latinoamericanos de fin de año

Alejandro Mendible

Tres hechos latinoamericanos destacaron en los medios venezolanos entre el flujo noticioso durante el último mes del año 93. En Colombia, la muerte de Pablo Escobar Gaviria trajo a colación la controversial relación entre el sórdido mundo del bandolerismo y sus vinculaciones con los sectores populares. En Chile, el triunfo electoral de Eduardo Frei Ruiz Tagle plantea las dificultades de la transición de la dictadura militar pinochetista al ejercicio pleno de la democracia civil. En Panamá, la nominación del cantante Miguel Blades a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo mes de mayo indican los nuevos derroteros del movimiento progresista en ese país.

Por diferentes razones se nota en los medios de comunicación una política informativa tendiente a destacar principalmente a los protagonistas individuales de los eventos. Por tal motivo, en las noticias aparecen las causas socio-económicas u otras fuerzas generadoras inducentes como un marco de fondo borroso o se plantean en un contexto cuyas explicaciones resultan, por lo general, incompletas o insatisfactorias. En cierta medida, dicha tendencia podría explicarse por la fuerte prédica en nuestro medio de la importancia del superhombre como el sector principal del proceso histórico. Del culto al héroe que considera que los grandes individuos, con su avasallante personalidad, son los guías y factótum de la historia.

Sin embargo, Escobar, Frei y Blades en su participación resumen en buena medida la situación actual de sus países. Más allá de sus actuaciones como primeros protagonistas de la noticia los hechos en que se involucran representan tópicos destacados de los graves problemas presentes en la región. En Colombia, la violencia desatada por Escobar se le revirtió como un bumerang y contribuyó para que la opinión pública reclamara por mayor

presencia del Estado. En tal sentido, el desafío al débil Estado colombiano redundó en su beneficio, ganando respaldo para justificar su gasto en seguridad y defensa y de esta manera colocarse por encima de su adversario. En Chile, el inicio del segundo gobierno civil después del autoritarismo militar constituye un caso de análisis de las posibilidades de entendimiento y convivencia entre civiles y militares por vía democrática. Y en Panamá, las próximas elecciones avizoran el eventual agotamiento de las fórmulas conservadoras y abren nuevas expectativas en relación a la suerte del canal.

LA MUERTE DE PABLO ESCOBAR

La vida azarosa de Escobar se encuentra estrechamente vinculada con el narcotráfico. El narcotráfico es una de las grotescas modalidades asumida por la violencia en Colombia en las últimas décadas. Dicho fenómeno desde su aparición como elemento corrosivo de la sociedad en la primera parte de la década de los setenta hasta su consolidación como grave problema nacional en la actualidad, la producción, tráfico y consumo de narcóticos ha venido incidiendo de manera creciente en la desestabilización social y política del país. Lo que en un comienzo se percibió, por parte de la sociedad y del gobierno, como una curiosa excentricidad propia de ciertas regiones del país con larga tradición de contrabando, muy asociada con la marihuana, pronto se convirtió en una fuerza poderosa desafiante del orden establecido y generadora de una insospechada avalancha de violencia y zozobra. La tolerancia inicialmente permitió que los dineros de la droga se convirtieran en inversiones urbanas y rurales en finca raíz, en campañas políticas y en financiación del deporte profesional. El deformante mundo del delito gradualmente se fue transformando en sospecha, te-

mor y rechazo, no sólo a la presencia de recursos contaminados con el narcotráfico, sino también al terrorismo y al eventual proyecto del narcotráfico, en cabeza propia o en las de ciertos sectores sociales de extrema derecha asociados a él con severas pretensiones desestabilizadoras. En este contexto alucinógeno destacó la actuación de Escobar.

En Latinoamérica son ampliamente conocidas las vinculaciones entre el delito y la política. Pero por otra parte, el bandolerismo social es una manifestación donde se confunde su participación con la carga revolucionaria implícita en muchos de los procesos latinoamericanos. Por ejemplo, la incidencia de los cangaceiros en Brasil recoge la atávica lucha contra el latifundismo presente en el empobrecido nordeste. En Perú en algunos momentos de su historia el bandidismo ha expresado la lucha legítima del indígena contra la explotación. También en México puede detectarse durante el proceso de la Revolución, como en el caso de Pancho Villa.

Para los estudiosos del tema ser «bandolero» significa haber perdido la legitimidad política. El bandolerismo, por lo menos desde el nacimiento del mito de Robin Hood en la Inglaterra medieval, ha sido un fenómeno universalmente extendido. Sus períodos de mayor expansión y florecimiento han sido vinculados a la crisis generada por la transición de las sociedades precapitalistas a la moderna sociedad capitalista. Para el conocido historiador francés Fernand Braudel la manifestación se presenta en el Mediterráneo del siglo XVI ante todo, como una revancha de sectores populares contra los Estados organizados defensores del orden político y social. En el caso de Colombia, la manifestación ha sido estudiada por Gonzalo Sánchez G. y Donny Meertens en un libro que ya puede considerarse un clásico: «Bandoleros, gamonales y campesinos» (1985), donde destacan los vínculos con la sociedad colombiana, el contexto político, los antecedentes y los perfiles regionales de dicha manifestación durante el período del Frente Nacional a partir del derrocamiento de Rojas Pinilla.

El bandolero en las grandes urbes latinoamericanas adquiere un nuevo comportamiento: el del «malandro». El malandro, según el politólogo Arturo Sosa S.J., «es la encarnación viva de la violencia y de la amenaza a la seguridad pública y privada». Añade Sosa que el malandro

aparece como la figura más destacada del barrio. Gracias a su audacia, las armas y las drogas pueden ofrecer a sus novias, madres, amigos y a sí mismos lo que la sociedad, a cuyo margen viven, considera signos de bienestar, imposible de obtener por la vía del estudio, el trabajo honrado y la legalidad.

En el caso de Escobar, su actuación de bandolero en algunos aspectos manifiesta «cierta conciencia de clase» hacia los sectores populares determinando su contradicción interior entre sus orígenes delictivos del narcotráfico y su trayectoria real. En los primeros años de la década de 1980 hizo construir unas 5.000 viviendas para personas humildes. Igualmente construyó campos deportivos, lo que hizo que miles de personas, habitantes de los barrios pobres de Medellín, lo consideraran como su benefactor.

Como en el conocido ensayo de García Márquez, la desaparición de Pablo Escobar era la «crónica de una muerte anunciada», su desafío al Estado marcó su suerte final. El presidente Gaviria manifestó después de su abatimiento que los colombianos demostraban cómo no existía organización criminal organizada capaz de desafiar el Estado.

La influencia de la actuación de Escobar en los sectores populares puede inferirse por su entierro, el cual se efectuó en medio de desórdenes en Medellín. La policía calculó en unas 20 mil personas que acudieron a ver el féretro que reposaba junto a su fiel guardaespaldas Alvaro Jesús Agudelo, alias «El Limón». En todo caso, el gran despliegue de la noticia hace pensar no sólo en el abatimiento de un bandolero común sino en el nacimiento de un nuevo mito.

EL TRIUNFO ELECTORAL DE EDUARDO FREI

Chile el país sudamericano, dotado de «una loca geografía» (según el poeta Felipe Masiani), ha vivido a partir del 11 de septiembre de 1973 el cercenamiento de sus libertades democráticas que en un tiempo fueron ejemplo para el Continente. De la dura experiencia autoritaria todavía no se conoce el paradero de los cerca de 1.100 detenidos políticos que dejó el régimen militar, y la difícil transición política emprendida durante la administración de Patricio Aylwin continúa plagada por «los enclaves autoritarios» que

restringen el desarrollo pleno de las actividades civiles. Los militares, y particularmente el General Augusto Pinochet, se abrogan la condición de «tutores» de la presente democracia restringida imperante en el país.

El 4 de septiembre de 1970 el líder socialista Salvador Allende, con el apoyo de los comunistas y la Unidad Popular, llega a la Presidencia de Chile por la vía electoral. Considerando las tradicionales relaciones armoniosas entre el ejército y los civiles, los sectores de izquierda pensaron que estaban dadas las condiciones para que se operara un caso único en el marco de la guerra fría consistente en la transición pacífica del capitalismo al socialismo. Sin embargo, la permanencia del sistema capitalista y la estabilidad de su sistema democrático escondían un elemento profundamente conservador. El 23 de agosto de 1973 el general Carlos Prats renuncia a la jefatura del Ejército, debido a la crisis política, y Allende designa como nuevo Comandante en Jefe al general Augusto Pinochet, quien el mes siguiente, el 11 de septiembre, encabeza el golpe de estado. El hecho donde de manera estoica muere el presidente Allende en su puesto, en el Palacio de la Moneda, constituye una afrenta del abuso del poder militar. De ahí el cercenamiento brutal de la democracia, que abre un período de autoritarismo encabezado por la controversial figura de Pinochet, el cual aún no ha terminado.

El 14 de diciembre de 1989 el líder democristiano Patricio Aylwin logra el triunfo electoral y obtiene la presidencia después de derrotar al candidato oficialista Hernán Bachi. Durante los últimos 30 años la historia política chilena ha pasado por las disímiles experiencias de la «Revolución en libertad», con Eduardo Frei, la vía «Chilena al socialismo», con Salvador Allende, y a partir de 1973 el autoritarismo dictatorial de Pinochet hasta finales de 1980, cuando la movilización multitudinaria agrupada bajo el slogan de «democracia o dictadura» se volcó sobre las urnas electorales para retomar la senda de la democracia.

Para finales de 1993 se produjeron las elecciones mediadas por las restricciones aún imperantes del autoritarismo pinochetista. En el evento resultó triunfante el ingeniero civil Eduardo Frei Ruiz Tagle. Frei, según un chiste que corría antes de las elecciones, contaba con dos

cosas en su favor: su nombre y su apellido. Y en la presidencia, a partir del presente año, tendrá que entenderse con Pinochet, quien podrá continuar, según un artículo de la constitución elaborado bajo su régimen, hasta marzo de 1998. También desde la primera magistratura tendrá que sortear las restricciones democráticas vigentes consistentes en terminar con la inamovilidad de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas, ponerles término a los senadores designados y establecer la reforma del sistema electoral impuesta por los militares.

Frei ha señalado que no se considerará un presidente simplemente continuista de Aylwin, por cuanto hay «dicotomía o contradicción entre continuidad y cambio». Pero está por verse en qué medida su actuación al frente del nuevo gobierno podrá contribuir a cicatrizar la profunda herida y afrenta creada a partir del 11 de septiembre de 1973.

LA CANDIDATURA DE RUBEN BLADES

Rubén Blades, conocido cantante y doctor en derecho graduado en la universidad de Harvard, cuenta con el respaldo político entre sus compatriotas surgido de las connotaciones sociales de su cancionero. Recientemente, un núcleo de jóvenes intelectuales progresistas se han agrupado en un movimiento, el «Papa Egoró», con el propósito de postular a Blades para la presidencia de la república. Blades, en su aceptación, señaló que aspira a establecer un nuevo tipo de relaciones con los Estados Unidos y que convocará a un referendun para decidir la presencia de las bases militares. También prometió poner fin a la corrupción para que los ciudadanos no tengan que luchar contra «la misma corriente de aguas negras». Tradicionalmente, los panameños han considerado que «su posición geográfica ha sido su principal recurso natural». Desde los inicios de la conquista del Continente, desde Panamá se organizó la explotación sistemática de la costa occidental de América del Sur y de Centroamérica. Al comenzar la explotación de las minas peruanas, el istmo se convirtió en una ruta comercial de primer orden. Procedentes de El Callao y de Manila, las naves llegaban al puerto de Panamá; los metales preciosos y los productos chinos eran transportados en mulas, que cruzaban el



La actuación de los Estados Unidos en relación a Panamá durante los últimos años evidencia su voluntad política de no respetar el tratado Torrijos-Carter

istmo, para ser embarcados seguidamente en Nombre de Dios rumbo a España; en sentido inverso se realizaba el tráfico de productos manufacturados procedentes de la metrópoli.

La importancia estratégica del Canal durante el presente siglo puede medirse por la gran influencia económica que ejerce sobre los puertos más importantes de la costa atlántica de los Estados Unidos y de sus incuestionables vínculos con los puertos del Pacífico. A través del canal se envían grandes volúmenes de armamento militar, petróleo y otros productos estratégicos para el mundo industrializado. Desde el punto de vista militar, ha sido una vía de suplemento de vital importancia en los momentos de conflicto militar: La Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, la guerra de las Malvinas y en conflictos de menos alcance pero de gran significación geopolítica, como las confrontaciones surgidas en el Medio Oriente o en el Mediterráneo. Por otra parte, el canal ejerce gran importancia sobre las economías de los países sudamericanos, en especial Ecuador, Chile y Perú. Su importancia comercial se puede medir tomando como referencia los datos de 1988 cuando, 13.441 barcos de carga portadores de más de 157 millones de toneladas atravesaron el canal. Correspondieron a los Estados Unidos el 65% de dicho movimiento.

Las luchas de los panameños por el rescate de la soberanía de la zona del canal ocupan, a partir de la década de 1960, atención importante en sus aspiraciones reivindicativas. En 1964 una protesta estudiantil, con el propósito de colocar la bandera panameña en la zona del canal, arrojó el saldo de 21 muertos, quienes

pasaron a ser considerados héroes nacionales. En 1969 el Jefe de la Guardia Nacional Omar Torrijos derroca al presidente constitucional Arnulfo Arias. Torrijos no instauró una dictadura tradicional de las conocidas en el área y, por el contrario, emprendió una labor de cambio social: intentos de reforma agraria, educación, la explotación del cobre con criterio nacionalista y otras medidas de orientación popular. Además, en 1977 alcanzó un Tratado con la administración del presidente Carter, donde se reconoce la transferencia de la zona del canal para los panameños para fines de siglo. Torrijos falleció en extrañas circunstancias el 31 de julio de 1981, pero el torrijismo continuó actuando en cada uno de los acontecimientos relevantes de la historia panameña.

La actuación de los Estados Unidos en relación a Panamá durante los últimos años evidencia su voluntad política de no respetar el tratado de 1977. El irrespeto a los acuerdos se presenta a través de una crisis caracterizada por una bien preparada campaña de desestabilización política, la cual comenzó en 1986 y alcanza su punto álgido en diciembre de 1989 cuando se produce la intervención abierta, que de manera descarada la administración de George Bush denominó «Causa Justa». Durante esos años el general Noriega fue quedando aislado. El 7 de mayo de 1989 se producen unas elecciones que son desconocidas mediante el empleo de la violencia por el gobierno, lo que determinó que en una decisión abrumadoramente mayoritaria la OEA condenara lo ocurrido, y se le crearon las oportunidades para

la actuación de los marines, aprovechando la inercia de la diplomacia latinoamericana.

En esa oportunidad, como señalaba el internacionalista Juan José Monsant (en rev. SIC, feb.90), la fuerza pública de un Estado actuó como fuerza pública nacional en el territorio de otro Estado. En este caso la necesaria intervención militar de los Estados Unidos sobre Panamá para capturar y juzgar a Noriega por delitos cometidos contra su ordenamiento legal. El general Noriega había sido un aliado incondicional desde 1969 hasta 1987 cuando por diversas razones cambió y se enfrentó a los intereses del Norte. Con la intervención se buscó, además de capturar a Noriega, la destrucción de las Fuerzas de Defensa panameñas, la instauración de un gobierno de confianza y la seguridad de poder conservar las bases militares del Comando Sur más allá de 1999.

Para la constitución de un gobierno «confiable», se prestaron, a modo de cipayos, para la presidencia Guillermo Endaran, y para las vicepresidencias Guillermo Ford y Ricardo Arias Calderón, quienes fueron juramentados en la base militar norteamericana en la ciudad de Panamá una hora antes de la invasión de las fuerzas norteamericanas. La invasión, según la Asociación de Parientes de las Víctimas del 20 de Diciembre de 1989 (recientemente constituida), provocó la muerte entre 2.000 y 4.000 panameños, cuando 26.000 efectivos norteamericanos invadieron al país.

A partir de la invasión los movimientos sociales han rebasado a los partidos políticos y han protagonizado la resistencia nacional y social, alcanzando un momento destacado el 11 de junio de 1992, cuando abortaron un acto oficial en homenaje al candidato presidencial George Bush. Precisamente integrantes de estos movimientos sociales son los que se han agrupado para proponer la candidatura de Ruben Blades.

A modo de conclusión, es oportuno recordar el acertado punto de vista del historiador italiano Benedetto Croce en el sentido de que «el hombre es un microcosmos, no en el sentido natural, sino en el sentido histórico: un compendio de la historia universal». En cierta medida tal consideración contribuye a interpretar las noticias relevantes de los tres protagonistas comentadas como una síntesis del complejo presente latinoamericano.